



OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

La Oficina de Control Interno Disciplinario, en ejercicio de las FUNCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, que le han sido asignadas por el artículo 5º de la Ley 1952 de 2019¹ «Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario», procede a expedir la siguiente referencia disciplinaria, con relación a EL DERECHO DE PETICIÓN Y SUS ALCANCES COMO FALTA DISCIPLINARIA.

INTRODUCCIÓN

Es el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Mediante el Derecho de Petición, entre otras actuaciones, se podrá solicitar, el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos, entre otros.

Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de esta, o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de la Ley en mención.

Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la Ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten; si este insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes.

Así también, en el evento de no ser competentes para dar respuesta al derecho de petición, éste deberá ser trasladado a la entidad competente, informando de dicho traslado al peticionario, en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley 1955 de 2015.

Cabe recordar que con ocasión de la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional en el año 2020 por causa del COVID-19, mediante Decreto Legislativo 491 de 2020, se ampliaron los términos establecidos para dar respuesta a las peticiones que durante ese período se presentaron por los ciudadanos; no obstante, con la expedición de la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022, que derogó el artículo 5 del referido decreto, se retoman los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015.

¹ **ARTÍCULO 5o. FINES DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA.** La sanción disciplinaria tiene finalidad preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública.

EL CONTENIDO DE LAS PETICIONES. Toda petición deberá contener, por lo menos:

- La designación de la autoridad a la que se dirige.
- Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El petionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el petionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.
- El objeto de la petición.
- Las razones en las que fundamenta su petición.
- La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.
- La firma del petionario cuando fuere el caso.

PROCEDIMIENTO

La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el petionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la Ley, requerirá al petionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el petionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido, solicite prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el petionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Ley 1755 de 2015: Por medio del cual regula el derecho fundamental de petición; donde esta deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

INCIDENCIA DISCIPLINARIA

No dar respuesta a los derechos de petición o no brindar respuesta oportuna dentro de los términos establecidos en la Ley, conlleva a una posible comisión de falta disciplinaria por incumplimiento en las obligaciones a cargo de los servidores públicos y/o de los particulares que cumplan funciones públicas que se encuentren involucrados en la atención de los derechos de petición que se reciban, que genera un posible inicio de proceso de carácter disciplinario para determinar la responsabilidad.

Ley 1755 de 2015, ha establecido lo siguiente:

“Artículo 31. Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.”

Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 del 2021, dispuso: Destinatarios Ley Disciplinaria

“Artículo 25. Destinatarios de la ley Disciplinaria. Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en esta ley.

Para los efectos de esta ley y en concordancia con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998; son servidores públicos disciplinables los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación mayoritaria.

Los indígenas que ejerzan funciones públicas o administren recursos del Estado, serán disciplinados conforme a este código” (Negrilla fuera de texto)

Régimen de los particulares

“Artículo 70. Sujetos Disciplinables. El presente régimen se aplica a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria; que administren recursos públicos; que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales y a los auxiliares de la justicia.

Los auxiliares de la justicia serán disciplinables conforme a este Código, sin perjuicio del poder correctivo del juez ante cuyo despacho intervengan.

Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, desarrolle o realice prerrogativas exclusivas de los órganos del Estado. No serán disciplinables aquellos particulares

que presten servicios públicos, salvo que en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán destinatarios de las normas disciplinarias.

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines específicos. (...) “(Negrilla fuera de texto).

Competencia atendiendo la calidad del sujeto disciplinable

“Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.

Falta Disciplinaria

“ARTÍCULO 38. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente

“ARTÍCULO 39. PROHIBICIONES. A todo servidor público le está prohibido: 8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento”.

ESTADÍSTICA

La Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio del Deporte ha recibido año tras año quejas y reportes por violación al derecho de petición, detectándose de forma reiterada la inobservancia por parte de los servidores públicos y/o los particulares que cumplen funciones públicas, en los términos de respuestas establecidos en la Ley, falta de respuesta precisa y de fondo, lo que ha conllevado que este Despacho diera el trámite correspondiente a actuaciones disciplinarias como lo establecen las normas mencionadas.

CONCLUSIONES

El derecho de petición es aquella figura jurídica de orden constitucional, que nos permite a todos los ciudadanos tener claridad sobre las situaciones jurídicas que podamos presentar tanto a nivel privado como público, por lo tanto, conocer sus alcances jurídicos es de suma importancia para todos los habitantes del país. El servidor público que omita dar respuesta o incumpla los términos de Ley, podría verse inmerso en una acción disciplinaria.

Se insta a todas las dependencias del Ministerio del Deporte, buscar acciones que propendan al mejoramiento en los tiempos de respuesta, en las omisiones de

respuesta a las peticiones que se reciban, tendientes a absolver los requerimientos de los peticionarios, y así reducir las acciones disciplinarias a que haya lugar por dicho incumplimiento.

Ahora bien, en el transcurso de las investigaciones disciplinarias que se adelantan en esta Oficina y que se relacionan con peticiones presuntamente no respondidas, se ha logrado evidenciar que no todos los radicados que el sistema reporta como no respondidos en los términos establecidos, corresponden a derechos de petición, algunos de ellos, hacen referencia a asuntos que, por su naturaleza, dan origen a otro tipo de actuaciones, cuyos términos son diferentes y, en ese sentido, habría que informar al peticionario, cuál es el trámite que surtirá su solicitud.

Los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria (Contratistas) son sujetos disciplinables cuando dentro de sus obligaciones se encuentre atender derechos de petición y se omita o se incumpla con los términos establecidos por la Ley para su respuesta, cuya competencia en materia disciplinaria corresponde a la Procuraduría General de la Nación, las Personerías y Supervisores de contratos a través del inicio del procedimiento administrativo sancionatorio.